



REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05266-31-05-001-2021-00280-01
Demandante:	CRISTIAN DAVID GUZMÁN SERNA
Demandado:	AVANZAR-ES IPS S.A.S
Asunto:	Consulta de Sentencia
Procedencia:	Juzgado Primero Laboral del Circuito de Envigado
Magistrada Ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Contrato de Trabajo

Medellín, noviembre veinticuatro (24) de dos mil veintitrés (2023)

En fecha anotada, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE como magistrada ponente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede desatar el grado jurisdiccional de consulta en favor del demandante, respecto de la sentencia proferida el 08 de septiembre de 2023 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Envigado, dentro del proceso ordinario laboral de única instancia instaurado por Cristian David Guzmán Serna en contra de AVANZAR-ES IPS S.A.S, conocido con el radicado único nacional 05266-31-05-001-2021 00280-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

El señor Cristian David Guzmán Serna, actuando en nombre propio, llamó a juicio ordinario laboral a la sociedad AVANZAR-ES IPS S.A.S, en procura que se declare que entre los extremos en litigio existió una relación laboral regida por un contrato a término indefinido, que inició el 26 de abril 2019 y concluyó el día 01 de julio de la misma anualidad, consecuentemente se condene a la pasiva al pago de las cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y prima de servicio, conceptos equivalentes a la suma de \$310.818, igualmente se condene a la sociedad AVANZAR-ES IPS S.A.S., a pagar la suma de 17.859.702 por concepto de indemnización por falta de pago, liquidada desde el 31 de Julio de 2019 (30 días posteriores a la terminación del contrato) y hasta que se realice el pago efectivo del mismo.

En respaldo de tales pedimentos expuso que el 23 de abril del año 2019 fue contratado por la señora Lina María Pérez Uribe, con autorización de la representante legal de la demandada, para prestar apoyo jurídico a la IPS con la elaboración de acciones tutela, teniendo en cuenta que cursaba sexto semestre de derecho, pactándose el pago de la suma de \$100.000 (cien mil pesos) por tutela elaborada, que igualmente se dispuso que la señora Lina Maria Pérez Uribe enviaría la documentación al correo electrónico del pretensor y este generaría el envío del escrito de tutela al correo remitente, que en ejecución del contrato realizó, dos acciones de tutela, en total, de las cuales se obtuvo un resultado judicial desfavorable, que la señora Pérez Uribe generó comentarios por este resultado que no fueron de su agrado, razón por la cual presentó renuncia a las labores encomendadas.

Agrega que procedió al envío de la cuenta de cobro por el valor de \$200.000 al correo principal de la empresa info@avanzaresips.com el día 2 de julio del año 2019, que se le respondió que no era posible hacerle el pago por cuanto no

contaba con el registro único tributario (RUT), sin embargo, se manifestó la voluntad de realizar el pago por medio de caja menor en dos pagos de \$100.000 cada uno; que el día 6 de agosto del año 2020 reiteró nuevamente la cuenta de cobro y envió la documentación necesaria para el registro único tributario, el certificado de cuenta bancaria y la correspondiente liquidación de los intereses, que obtuvo respuesta en la cual se expresó que por tratarse de un servicio profesional debía acreditar la calidad de abogado titulado en el momento de prestar el servicio a la institución, anexar contrato firmado por la representante legal de la misma y los fallos favorables, que dio respuesta el 08 de mayo de 2021 y la accionada no generó el pago.

1.2.- CONTESTACIÓN

El extremo litigioso por pasiva, asistido de apoderada judicial, replicó la demanda oponiéndose a lo pretendido, aduciendo que aunque es cierto que el demandante se entrevistó con la señora Lina María Pérez, no es cierto que haya sido autorizada por la representante legal su contratación, pues por recomendación de un tercero Avanzar-es sirvió de medio para contactar al accionante con dos familias que tenían hijos en situación de discapacidad y requerían formular una tutela, siendo estas quienes contrataron al accionante, que las acciones de tutela fueron suscritas por los padres y se fallaron en forma desfavorable a los tutelantes, dado que el pretensor no era abogado, no fue responsable ni diligente en la gestión, causando graves perjuicios a las familias, que es falso que haya renunciado porque nunca hubo una contratación, que es cierto que se presentó la cuenta de cobro y que Avanzar-es por evitar problemas a los padres de familia, a quienes se había recomendado una persona que ni siquiera era profesional, procedió a pagar \$200.000, pese a que lo pactado con los padres eran \$100.000 por tutela ganada.

Relieva que nunca hubo contrato de trabajo con el accionante, no hubo continuada subordinación ni dependencia y tampoco hubo salario, nunca prestó servicios a nombre de AVANZAR-ES, nunca se firmó nada por parte de la representante legal de esta y tampoco a nombre de la señora Lina Pérez.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones, y excepcionó de fondo abuso del derecho; mala fe; enriquecimiento sin causa e inexistencia de la obligación.

1.3.- SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Envigado, mediante fallo proferido el 08 de septiembre de 2023 declaró probada la excepción de fondo denominada inexistencia de la obligación propuesta por la demandada; absolvió a AVANZAR-ES IPS S.A.S. de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por CRISTIAN DAVID GUZMÁN SERNA y condenó en costas al demandante.

1.4. - ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal correspondiente ninguno de los extremos litigiosos presentó alegatos de conclusión.

2. - CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Procede el grado jurisdiccional de consulta en favor del señor ***Cristian David Guzmán Serna*** en cumplimiento de la sentencia C424 de 2015, que al declarar la exequibilidad condicionada del artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social dispuso: *“La disposición acusada es exequible en el entendido que también serán consultadas ante superior funcional, las sentencias de única instancia totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiarios”*

2.2. – PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Deberá la Sala determinar:

¿Si entre el señor Cristian David Guzmán Serna, en calidad de trabajador y Avanzar-es IPS S.A.S, en calidad de empleadora, existió una relación de trabajo, regida por un contrato realidad, desarrollado entre el 26 de abril y el 01 de julio de 2019?

En caso afirmativo ¿si al trabajador se adeudan cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicio y vacaciones proporcionales, así como la indemnización por la mora en el pago de salarios y prestaciones sociales (artículo 65 C.S.T)?

2.4. - TESIS DE LA SALA

Los problemas jurídicos propuestos se resolverán bajo la tesis según la cual el demandante no demostró la prestación personal del servicio a la sociedad accionada, como elemento principal del contrato de trabajo, en consecuencia, la sentencia debe ser CONFIRMADA.

2.5. - PREMISAS NORMATIVAS

El trabajo humano, en todas sus formas, goza de la especial protección del Estado (artículo 25 de la Constitución Política), pero los principios que gobiernan el derecho sustantivo laboral, no son aplicables a aquellos trabajos que están por fuera del escenario de subordinación, como ocurre frente a contratos de carácter civil o comercial.

En esta misma dirección se entroniza el concepto de contrato realidad que tiene fundamento en el principio constitucional de primacía de la realidad sobre las formas que eligen las partes en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, de donde se concluye que con independencia de la denominación que se dé al contrato, lo que determina el surgimiento de los derechos mínimos e irrenunciables del trabajador, es la confluencia de los

elementos que definen el contrato de trabajo, establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo.

Conforme a la citada norma, son tres los elementos que permiten la configuración de un contrato de trabajo, el primero, la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; el segundo, la continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, lo cual debe mantenerse por todo el tiempo o duración del contrato y el tercer elemento, el salario como retribución del servicio.

En complemento de la anterior previsión, el artículo 24 ibídem, modificado por el artículo 2 de la Ley 50 de 1990, consagra una presunción legal del elemento subordinación, una vez acreditada la prestación personal del servicio:

“ARTICULO 24. PRESUNCIÓN. Modificado por el art. 2, Ley 50 de 1990. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.”

Respecto de tal presunción, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha estructurado una línea jurisprudencial pacífica y uniforme, en torno a cómo se distribuyen las responsabilidades probatorias entre el empleador y el trabajador, criterio expuesto entre otras, en las sentencias SL39259 del 17 de abril de 2013, SL4027 del 08 de marzo de 2017 y más recientemente en sentencia SL 2295 del 24 de mayo de 2022 *“Lo anterior significa, que al actor le basta con probar la prestación o la actividad personal, para que se presuma el contrato de trabajo y es a la empleadora a quien le corresponde desvirtuar dicha presunción con la que quedó beneficiado el operario.”*

En suma, el principio de la realidad sobre la forma incita al operador jurídico a establecer la modalidad contractual existente entre las partes de acuerdo con los elementos esenciales de los distintos contratos, partiendo del reconocimiento de la autonomía contractual de las partes y los límites que a la misma impone el

legislador cuando se opta por una relación subordinada, en protección a lo derecho mínimos e irrenunciables del trabajador.

Consecuentemente, la jurisprudencia tiene por adoctrinado que al trabajador le basta con acreditar la prestación del servicio para que se active la presunción del contrato de trabajo regulada en el artículo 24 ibidem:

“Por último, debe destacarse que para configurar la existencia de un contrato de trabajo no es indispensable la demostración plena de los tres elementos denominados esenciales en el referido artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Pensarlo así haría nugatoria la presunción legal del artículo 24 ibidem, conforme a la cual basta la demostración efectiva de la prestación personal del servicio para que el contrato de trabajo se presuma, sin que se requiera prueba apta de la subordinación pues una vez aquella opera le corresponde a la contraparte desvirtuarla” (CSJ SL del 29-11-1958; SL del 05-05-1982, radicado 8247; SL del 27-06-2000, radicado 14096; SL del 17-05-2011, radicado 38182; SL10546-2014, SL15507-2015, SL16528-2016, SL781-2018, SL4444-2019, SL577-2020, SL3126-2021)

2.6.- CASO CONCRETO

En el sublite, se encuentra acreditado, pues así fue aceptado por la pasiva en la réplica al libelo inaugural y en el interrogatorio absuelto, que el 23 de abril de 2019 entre las partes se cumplió una entrevista para la discusión de la oferta de asesoría en la elaboración de acciones de tutela presentada por el demandante, reunión que tuvo lugar en las instalaciones de la IPS y en la que participó la señora Lina María Pérez, gerente de la entidad de salud.

No se discute, igualmente, que el pretensor, prestó el servicio de asesoría jurídica en la elaboración del escrito incoativo de la acción de tutela promovida por Mary Luz Valencia Álvarez, como representante legal del menor Sebastián Mejía Valencia, cuyo fallo obra parcialmente a folio 23 del anexo 09, Carpeta 1

De la misma manera, se glosaron al expediente correos enviados por la señora Lina María Pérez, Gerente de Avanzar-es S.A.S, en los cuales remitió a la

accionante con el mismo fin, documentación clínica de los siguientes pacientes, todos ellos menores de edad:

Folio 13	24 de abril de 2019	<i>“ Te envío los pocos papeles que tenemos de Juan Felipe; es el niño de Guarne, y la tutela que había hecho saludos”</i>
Folio 14	24 de abril de 2019	<i>“ Buen día. Envío información de Sebastián Mejía es de Sanitas; Si falta algo me cuentas”</i>
Folio 15	24 de abril de 2019	<i>“ Buen día. Envío información de Velintina Ramírez es de Sanitas si necesitas algo más me cuentas.”</i>
Folio 21	04 de mayo de 2019	<i>envia historia de Sara Martínez</i>

Hay coincidencia también en la versión de las partes en cuanto a que el joven Cristian Guzmán elaboró en total dos acciones de tutela, hecho que encuentra respaldo en los correos remitidos por el mismo a la gerente de Avanzar-es IPS, en fecha 28 de abril de 2019, en el cual remitió tutela del menor Juan Felipe y del 09 de mayo de la misma anualidad, en el cual envió tutela del niño Sebastián Mejía, folios 19 y 20 del anexo 02, carpeta 1.

En este contexto, colige la Sala, que la IPS, en efecto convino con el accionante la prestación del servicio de asesoría jurídica, en esa medida no puede abrirse paso la tesis según la cual la demandada solo sirvió de intermediaria entre los padres contratantes y el actor, en tanto que no existe ningún medio demostrativo que acredite que éste tuvo algún contacto con los progenitores de los menores. De cara a esta conclusión, no pasa inadvertido para la Sala que en el fallo de tutela del niño Sebastián Mejía, se lee que la pretensión de amparo estaba dirigida a que se autorizara el tratamiento del menor en la IPS Avanzar-es S.A.S., y se suscribiera convenio entre la EPS SANTITAS y la IPS accionada

En este punto, importa recordar que precisamente AVANZAR-ES IPS, tiene por objeto social, entre otras, la neurorehabilitación integral, la fisioterapia neurológica, las terapias de integración sensorial y otros tratamientos

neurológicos, en niños y pacientes con discapacidad o necesidades especiales (folios 1-10 anexo 02, carpera 1)

Vistas así las cosas, se deduce que en realidad el demandante prestó sus servicios personales a la IPS, quien tenía un interés directo en la autorización de tratamiento en esa institución, sin embargo, ello no resulta suficiente para deducir una relación de carácter laboral entre las partes ni para dar aplicación a la presunción de subordinación prevista en el artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo, antes citado, pues la naturaleza del servicio hace evidente que se trató de una asesoría jurídica independiente en dos casos específicos, que dieron lugar a la interposición de sendas acciones de tutela.

Deviene palmario que no hubo continuidad en la labor desplegada por el suplicante, pues entregó el producto de la tarea asignada el 28 de abril y el 09 de mayo de 2019, sin que haya ninguna actividad acreditada por parte del mismo en el periodo posterior y hasta el 01 de julio de 2019, que señala como extremo final de la relación. Se destaca, además, que el actor no realizó ningún esfuerzo probatorio para acreditar que el servicio prestado tuvo otro alcance, pues solo aportó los documentos relacionados con el cruce de correos con la señora Lina María Pérez, sin allegar ningún otro medio de prueba.

Por su parte la pasiva a quien correspondía desvirtuar la subordinación, se apoyó en el testimonio de su gerente señora Lina María Pérez, quien afirmó que Avanzar-es S.A., nunca tuvo un contrato laboral con el demandante, que este ofreció la asesoría para la elaboración de acciones de tutela y se puso en contacto con los padres de los menores interesados, atendiendo a que el actor es una persona también en condición de discapacidad que podía tener una mayor sensibilidad por el tema y a que afirmó no haber perdido nunca una tutela, enfatizando que el contrato fue con los padres, quienes se comprometieron a cancelarle al demandante \$100.000 por tutela con resultado favorable.

Importa precisar, que si bien la citada testigo, tiene interés directo en el resultado de la litis, al declarar que es la hija de la representante legal y ser la gerente, quien realmente dirige la empresa, aporta algunos elementos importantes para confirmar la ausencia de subordinación, pues señaló que el demandante solo visitó en una ocasión la IPS, que solo lo vio una vez, que este no prestó el servicio en las instalaciones, que no cumplía horario y que nunca le impartió órdenes, pues solo le remitió las historias clínicas.

Y aunque, como se anotó antes, no merece credibilidad la afirmación de que fueron los padres de los menores los verdaderos contratantes, resulta palmario que no existió contrato de trabajo y que se trató de una prestación de servicios independiente.

Aunado a lo anterior, a juicio de la Sala, de la misma narración fáctica del libelo inaugural era posible deducir la ausencia de subordinación, por la forma en que se afirma se cumplió la actividad, sumado a ello, aunque el demandante no era abogado, pues desde la demanda explica que en el momento de la contratación cursaba apenas sexto semestre de derecho, la asesoría requirió la aplicación de conocimiento especializados en materia jurídica que no pueden estar condicionados a órdenes del contratante, siendo claro que este no asistió a las instalaciones de la IPS, no cumplía turnos ni horario y no estaba sujeto a los reglamentos de la contratante.

En igual sentido, en el caso particular bajo estudio, es de resaltar el elemento de la temporalidad definitorio en los contratos de prestación de servicios, pues la actividad desplegada era inminentemente transitoria, pues además de la elaboración del escrito de tutela solo podía extenderse a la vigilancia de la causa constitucional.

En suma, el accionante celebró con la demandada un verdadero contrato de prestación de servicio, por consiguiente, solo tenía derecho al pago de los honorarios pactados, sin que surgieran los derechos propios del contrato de trabajo, honorarios que no fueron pretendidos en esta litis y que en todo caso se

acreditó fueron pagados por Avanzar-es S.A.S., el 10 de mayo de 2021, con posterioridad a la radicación de la demanda, a través de transferencia a la cuenta de ahorros Bancolombia 31643082716 indicada por el demandante en la cuenta de cobro del 02 de julio de 2019. (folios 15, anexo 09, Carpeta 1)

Corolario de lo anterior, sin que sean necesarias mayores consideraciones, resulta acertada la decisión de la funcionaria de primer grado debiéndose CONFIRMAR la sentencia consultada.

Sin costas en esta instancia.

3. - DECISIÓN

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se **CONFIRMA** la sentencia proferida el 08 de septiembre de 2023 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Envigado, al interior del proceso ordinario laboral de única instancia instaurado el señor por Cristian David Guzmán Serna en contra de la sociedad AVANZAR-ES IPS S.A.S

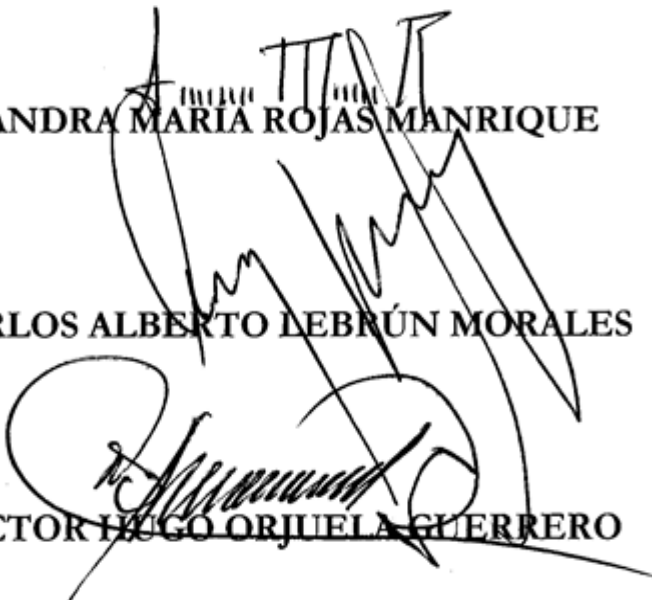
2.- Sin Costas en esta instancia, en virtud del conocimiento en el grado jurisdiccional de consulta.

3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la

Seguridad Social y el auto AL2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO